

# PABLO GONZÁLEZ

## COGOBERNANZA ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y TERCER SECTOR SOCIAL:

### UN MODELO A FORTALECER, UNA ALIANZA A POTENCIAR

DIRECTOR GERENTE DE GORABIDE

Las asociaciones de la discapacidad intelectual como Gorabide hemos hecho frente a múltiples obstáculos y dificultades a lo largo de una trayectoria vital que se acerca ya a los 60 años, durante la que hemos contribuido a construir el sistema vasco de servicios sociales. Y en cada uno de esos escollos, lejos de debilitarnos, hemos obtenido aprendizajes que nos han reforzado. Para ello, ha sido clave la implicación de muchas personas durante mucho tiempo; tanto del movimiento asociativo como de las instituciones públicas. Porque los logros sociales, el desarrollo social, sólo son posibles en un marco de cooperación, de sinergias y de alianzas. Y si algún aprendizaje podemos extraer de esta crisis sanitaria es que, en Euskadi, el modelo de alianza entre el tercer sector social y la Administración es fuerte y sólido. Ha resultado eficaz para dar respuesta a múltiples necesidades sociales, también a las derivadas de los efectos del Covid-19. Sirva de ejemplo la iniciativa Guztion Artean, como red de solidaridad organizada surgida

desde la cooperación entre las instituciones públicas y la iniciativa social.

A pesar de ello, desde el inicio de la pandemia, se comenzó a poner sobre la mesa la caducidad del actual modelo de servicios sociales; algo que puede parecer más una preconcepción que una conclusión, por cuanto se produce sin tiempo suficiente para disponer de evidencias. Muchos de los recursos sociales promovidos por las asociaciones durante décadas se han ido convirtiendo en servicios de responsabilidad pública, lo que sin duda significa un logro en términos de derechos, de garantías y de avance social. Pero ese concepto de responsabilidad pública lleva aparejado un contexto cada vez más regulado, donde la faceta gestora, en la que también nos hemos esforzado por alcanzar la excelencia, adquiere una relevancia significativa. Ante esto, pongamos el foco en el valor añadido que aportamos las asociaciones de familias en la provisión de esos servicios.

Ese valor añadido, esa utilidad adicional, viene definida por cuatro elementos. Tenemos la capacidad de aglutinar la colaboración de personas y colectivos de distintas sensibilidades, de manera que se enriquecen

las respuestas a las necesidades. Generamos innovación social, como precursoras de un modelo centrado en la persona, ahora tan extendido, basado en la calidad de vida, el compromiso ético y la gestión avanzada. Somos un agente vector de la transformación social, en favor de una sociedad más inclusiva, equitativa y solidaria, facilitando la participación ciudadana y la responsabilidad social. Pero además, y sobre todo, estamos gobernadas por las propias personas usuarias de los servicios que ofrecemos, lo que permite detectar de manera directa las necesidades existentes y emergentes en el colectivo al que prestamos apoyo; en un modelo más cercano a la autogestión que a la privatización.

Por todo ello, cuesta mucho atender al cuestionamiento que, aprovechando un momento de debilidad derivado de la crisis, pretende situar en un primer plano el debate público-privado en la gestión de los servicios sociales. Al margen de que toda lógica apuntaría a la conveniencia de reflexionar sobre el sistema en momentos de calma, disponiendo de datos, evidencias y distancia emocional para ponderar bien los hechos, la pandemia no nos puede llevar a ese cuestionamiento, sino a plantear la necesidad de fortalecer el modelo actual. Porque, si bien es cierto que está resistiendo los efectos de la pandemia, ha tenido impactos fuertes que han hecho crujir sus costuras.

Las entidades de iniciativa social que gestionamos servicios esenciales para personas con discapacidad intelectual estamos cumpliendo escrupulosamente con todos los protocolos de protección frente al Covid-19 dictados en cada momento por las autoridades competentes. Para ello, hemos tenido que realizar un enorme sobreesfuerzo económico; sobre todo, en lo concerniente a desinfección y adecuación de instalaciones, adquisición de equipos de protección individual en un mercado saturado, contrataciones de refuerzo e, incluso, realización obligatoria de PCR cuando el sistema público de salud aún no se hacía cargo de estas pruebas. Y, al mismo tiempo, estamos a la espera de posibles líneas públicas de ayudas que permitieran hacer frente a esos sobrecostes. Actualmente, las asociaciones estamos sufragando estos gastos extraordinarios

descapitalizando nuestras limitadas capacidades económicas y financieras, lo que pone en riesgo nuestra sostenibilidad y, por ende, la de nuestro modelo de desarrollo del sistema de servicios sociales. Pero también es necesario explicitar que el sobreesfuerzo se ha producido igualmente en la gestión y en lo emocional, del mismo modo que lo ha sido en otros servicios públicos que han estado más en el foco social del reconocimiento.

El verdadero riesgo que tiene el modelo es que pierda su contenido esencial; es decir, la colaboración en un plano de alianza y complicidad. En un símil agrícola, regar el plantío para que no se convierta en un pedregal. Porque el peligro de debilidad para el sistema actual puede llegar por dos vías: no alimentarlo y que los efectos hagan desaparecer a las entidades sociales. En consecuencia, debemos fortalecer un modelo que está demostrando ser útil, apostando por una mejora cualitativa de la cogobernanza público-privada que supere la fórmula en la que la Administración ejerce la titularidad y las asociaciones la gestión. Tendamos hacia un sistema en el que el diálogo civil sea el eje principal para la toma de decisiones, y potenciémoslo mediante acciones que lo llenen de contenido, no quedándonos en una mera declaración de intenciones. En esa labor, surgen ideas como compartir la estrategia, evaluar el impacto en las personas usuarias y en las entidades colaboradoras, calcular la capacidad de transformación y de respuesta a necesidades actuales y emergentes... Todo ello a través de una cooperación colaborativa, que redunde en la mejora de las actuales alianzas.

Y no estamos descubriendo nada nuevo. O tal vez sí, porque en las entidades del tercer sector social, tradicionalmente, hemos pasado por alto denominar innovación a lo que hacemos, a pesar de que hemos sido pioneras en múltiples ocasiones. Por eso, podemos decir que no sólo tenemos un pasado valioso y un presente trascendental, sino también un sólido futuro. Al igual que lo tiene el modelo de cogobernanza con el sector público que abogamos no por mantener, sino por fortalecer y potenciar.